

UN ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ACTUAL EN GUATEMALA

Por Carlos A. Castillo E.

Las extraordinarias movilizaciones contra la corrupción acaecidas de abril a septiembre de 2015, debido a su limitado carácter democrático, que reclamaban básicamente un funcionamiento limpio de la institucionalidad del Estado burgués, pudieron ser encauzadas por la embajada estadounidense y la oligarquía hacia el proceso electoral. Esto dio como resultado que ganara la contienda el candidato novato e inexperto Jimmy Morales, autoproclamado como “ni corrupto ni ladrón”, respaldado por el partido FCN-Nación, fundado por exmilitares de línea dura. El voto a favor de Morales fue el voto de castigo contra los políticos corruptos y el sistema político en general.

La inexperiencia e improvisación de Morales y su partido se hicieron evidentes a lo largo de su campaña electoral, en la cual nunca presentaron un plan de gobierno coherente. En la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para 2016, los once diputados electos del nuevo oficialismo no lograron ningún puesto, y en ninguna de las comisiones legislativas lograron la presidencia. Para remediar esto, la bancada del FCN-Nación recurrió a la vieja táctica de reclutar a diputados de otras bancadas con la promesa de prebendas, en especial del control sobre la ejecución de obras en el interior del país, un lucrativo negocio; de esta manera logró sumar 37 diputados, la mayoría ex miembros del Partido Patriota y del partido Lider, acostumbrados a prácticas corruptas, convirtiéndose en la bancada más numerosa.

El nuevo equipo de gobierno

El presidente Morales presentó su equipo de gobierno hasta el día de la toma de posesión, después de postergar el anuncio una y otra vez. Esto fue sin duda síntoma de las negociaciones con los diferentes actores de poder en Guatemala. Al final el nuevo gobierno fue cooptado por la embajada estadounidense, la oligarquía y los grupos burgueses emergentes, que lograron colocar a sus agentes en los puestos claves. Los grupos de la oligarquía y los grupos burgueses emergentes lograron influencia en los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo Social, Energía y Minas, Agricultura Ganadería y Alimentación, la representación ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, la oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Programa Nacional de Competitividad, entre otras dependencias. Los intereses de Estados Unidos están presentes en los ministerios de Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Gobernación, y en la Dirección General de Inteligencia Civil. Otro grupo de funcionarios procede del anterior gobierno o son allegados al presidente Morales, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, el de Comunicaciones, Educación, Salud y Asistencia Social, Cultura y Deportes, y las distintas secretarías vinculadas a la presidencia.

Morales se ha hecho rodear de cuatro exmilitares, una pequeña junta militar, sin cargos oficiales en el gabinete de gobierno, pero que tienen gran poder. Ellos son el diputado por el FCN Edgar Ovalle, los excoroneles Herbert Melgar Padilla y Mario Aragón Paredes, y el exgeneral Edgar Ricardo Bustamante. Los cuatro tienen un lado oscuro vinculado con organismos paralelos de seguridad y el narcotráfico. La permanencia de estos cuatro personajes al lado del presidente no augura nada bueno el gobierno del FCN-Nación.

El plan de Estados Unidos para Guatemala

La peculiar coyuntura por la que atraviesa Guatemala expresa una continuación de los factores que condujeron a la crisis política del año pasado, con la caída del gobierno del Partido Patriota. Estados Unidos continúa impulsando las reformas que considera necesarias para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad, que incluye expulsar de las instituciones del Estado a los funcionarios corruptos, enjuiciándolos, y también fortalecer financieramente las arcas estatales obligando a los empresarios al pago de impuestos. El motivo es frenar el fuerte flujo migratorio de la población del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia los Estados Unidos, resultado de la miseria y la pobreza que han dejado las medidas neoliberales impulsadas por el mismo imperialismo. Pero también busca crear Estados fuertes, con instituciones que funcionen eficientemente, que sean sus aliados para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos emergentes, principalmente de Rusia y China, que ya tienen presencia en Nicaragua y Costa Rica.

El gobierno de Jimmy Morales ha dado muestras de debilidad e inseguridad al momento de enfrentar los graves problemas del país, dando la impresión de que improvisa infructuosas soluciones de corto plazo. Por ejemplo en el alarmante tema de salud pública, empezó con el anuncio triunfal de que la solución sería recurrir a donaciones privadas de medicinas e insumos, que en efecto hicieron empresas grandes y ongs. Sin embargo, en julio el ministro Cabrera tuvo que renunciar ante las crecientes protestas de trabajadores de salud y su incapacidad para resolver la crisis permanente en los hospitales. Otra característica ha sido la disminución de la inversión pública, que según las autoridades del Banco de Guatemala ha caído hasta en un 20%. A finales del primer semestre del año, el gobierno ha ejecutado cerca del 40% del presupuesto 2016, la mayor parte en gastos de funcionamiento. Los motivos son varios: que los nuevos funcionarios están aprendiendo a administrar sus dependencias; que la nueva Ley de Contrataciones, en su afán de transparentar el gasto, impide tener agilidad en las compras; que la persecución contra la corrupción tiene atemorizados a los funcionarios, quienes prefieren ser cautelosos a la hora de autorizar y firmar gastos. Lo cierto es que la parálisis del gobierno ha sido un factor importante en la relentización general de la economía, manifiesta en lo que va del año.

Quién domina la escena política

La escena política ha sido más bien protagonizada por los organismos que impulsan la batida contra la corrupción y las reformas al sistema político, y que gozan del respaldo de la embajada de los Estados Unidos: El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Presidencia del Congreso de la República. El MP y la CICIG iniciaron el año capturando a exmilitares implicados en masacres a la población en los años 80s, algunos de ellos vinculados al FCN, como el diputado Edgar Ovalle, mano derecha del presidente Morales durante la campaña electoral, y que no ha sido capturado porque goza del derecho de antejuicio, mismo que las cortes no han permitido que se levante; esta acción enviaba a Morales el mensaje de que la embajada no toleraría a exmilitares con las manos sucias en los puestos de gobierno.

En el transcurso de los meses, las denuncias y capturas solicitadas por el MP y la CICIG se han centrado en: los casos de corrupción en el otorgamiento de plazas de trabajo en el Congreso; el contrato fraudulento con una empresa española para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal; el financiamiento corrupto del Partido Patriota y el otorgamiento de contratos del Estado a cambio del mismo; la compra de regalos costosos para el expresidente Pérez Molina y la expresidenta Baldetti por parte de exfuncionarios del gobierno con fondos de

sus dependencias. Por su parte la SAT, bajo el mando de un nuevo superintendente, ha intervenido varias empresas grandes y medianas, por fraude fiscal, capturando o arraigando a sus representantes legales o gerentes.

Lo particular esta vez ha sido la captura de grandes empresarios, vinculados a la oligarquía o la intervención de sus empresas; este ha sido el caso de los bancos G & T Continental y Banrural (el segundo y tercero en importancia del país), la empresa Aceros de Guatemala, la cadena hotelera Camino Real S.A., Ajemaya, Farmacias Galeno, Farmacias de la Comunidad, una exportadora de banano y una de café. En todos los casos la SAT ha logrado que cancelen centenas de millones en multas e impuestos atrasados. En el caso de los bancos arriba mencionados, sus gerentes y otros funcionarios resultaron implicados en el financiamiento corrupto al Partido Patriota. Esto quiere decir que el imperialismo estadounidense está dispuesto a enfrentar a quien sea, oligarquía incluida, en la implementación de sus planes, tal como lo afirmó el embajador Todd Robinson.

La alarma que ha cundido entre los exmilitares y sectores de la oligarquía tuvo su expresión en marzo, en las declaraciones del nuncio apostólico, respaldadas por el presidente Morales, pidiendo al cuerpo diplomático no intervenir en la política nacional; esto coincidió con una carta enviada por el canciller a los embajadores, pidiéndoles no intervenir en los asuntos internos del país, y amenazando con tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable. Esta maniobra parece dirigida contra el embajador de Estados Unidos y la representante del Sistema de Naciones Unidas. Después de marzo ya no hubo otro intento de reaccionar contra los representantes extranjeros.

En cuanto al Congreso de la República, el nuevo período legislativo inició con la denuncia, de parte del presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena, de corrupción e ilegalidades en el otorgamiento de plazas e irregularidades en los salarios de los trabajadores. En el transcurso del semestre, el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformas al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejudio, reformas a la Ley Orgánica de la SAT, a la Ley de Carrera Judicial, y aprobó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Por su parte, la Cicig y los presidentes de los tres poderes del Estado iniciaron un diálogo nacional para impulsar importantes reformas al sector justicia. En todos estos casos, el juego de intereses en el seno del Congreso dio como resultado reformas que no satisfacen totalmente las expectativas de la población, en especial en los casos de las reformas electorales; sin duda algo similar sucederá con las reformas al sistema judicial.

Cabe preguntar si en esta sacudida a las estructuras corruptas enquistadas en el Estado y en la reforma al sistema político resulta beneficiado algún grupo específico de la burguesía, o dicho de otra manera, si Estados Unidos pretende favorecer a algún sector burgués en especial con los cambios que está impulsando. En las capturas, denuncias e intervenciones derivadas de los casos de corrupción o defraudación fiscal, han resultado implicados por igual banqueros, industriales, comerciantes y exportadores; algunos vinculados a familias de la oligarquía, otros a grupos burgueses de reciente formación o emergentes, como se les suele llamar.

La Cámara de Industria de Guatemala levantó voz de protesta ante la resolución de las cortes que ordenó el cierre de la empresa minera en La Puya. Pero la coordinadora de cámaras empresariales, Cacif, en términos generales ha aceptado que los empresarios que tengan asuntos pendientes con la ley deben enfrentar sus procesos y rendir cuentas, pidiendo solamente que se respeten los procedimientos legales.

Entonces, podemos afirmar que Estados Unidos está implementando sus planes de limpieza de las instituciones estatales y de reforma al sistema político por encima de los intereses particulares de cualquier grupo de la burguesía, y en contra de aquellos que resulten implicados, sea cual sea su grupo de interés económico. Los grupos oligárquicos y los grupos empresariales emergentes tendrán que adaptarse a los nuevos vientos que soplan, y llegar a acuerdos con la embajada estadounidense. Las reformas políticas en curso se verán limitadas por los nuevos acuerdos y los intereses ligados a ellos. Esto ya se está viendo en los cambios que el Congreso está aprobando a algunas leyes claves, cambios que se revelan insuficientes y que protegen determinadas ventajas para ciertos sectores.

Las organizaciones sociales a la cola de las instituciones del Estado

Los grupos que surgieron al calor de las movilizaciones democráticas del año pasado (JusticiaYa, La Batucada del Pueblo, Anonymus, Otra Guatemala Ya, Movimiento Semilla, etc.), se han esforzado infructuosamente por reavivar las protestas en la Plaza Central al nivel de convocatoria anterior. Ello a pesar de que formaron una coordinadora con otras organizaciones y empiezan a hablar de la posibilidad de formar un partido político. Estos grupos se han quedado sin banderas, y este año van como vagón de cola de la Cicig y el MP, apoyando sus acciones y reclamando la renuncia de funcionarios que ya están acusados de corrupción. En junio varios de estos grupos y otras organizaciones sociales, incluyendo a la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOOC), dieron su respaldo a varios funcionarios del Estado, por la labor que realizan contra la corrupción, entre ellos: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la nueva Procuradora General de la Nación, el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, la jefa del Ministerio Público y el ministro de gobernación; es decir la plana mayor del Estado Burgués. El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) manifestó su apoyo a la Cicig, y una coordinadora de asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos solicitó que la Cicig inicie una investigación en la administración de la Usac. En cuando a la izquierda electoral, URNG-Maíz ha dado su apoyo a la Cicig y el MP, mientras que Convergencia se encuentra dividida al respecto. Esto significa que el plan de reformas del imperialismo va viento en popa, y que las instituciones del Estado burgués están ganando credibilidad ante la población.

Las protestas sociales

A la par del crecimiento de la confianza en las instituciones estatales, que significa un retroceso en la consciencia, la presión de las bases de las organizaciones populares ha conducido a un nuevo ciclo de movilizaciones, luego de la calma que sucedió al proceso electoral 2015. A lo largo del año ha habido una serie de protestas protagonizadas principalmente por los trabajadores estatales en las áreas de salud y educación; los sindicatos se movilaron mes tras mes demandando mayor financiamiento, abastecimiento a los hospitales, pago de salarios atrasados, unificación salarial, inversión en infraestructura escolar, insumos para los estudiantes, estabilidad laboral. En el caso del magisterio, tanto el sindicato mayoritario, el Steg, como el independiente Magisterio en Resistencia lograron que el Congreso retrocediera en la aprobación de un descuento a los salarios de los trabajadores estatales para subsidiar un incremento en la pensión que reciben los jubilados del Estado.

Las continuas protestas también lograron que el presidente Morales accediera a que cuatro mil maestros en los reglones por contrato pasen a tener estabilidad laboral en el reglón presupuestado. El movimiento campesino también ha salido a las calles a plantear sus demandas. El bloque conformado por Cnoc, Codeca y Uvoc ha planteado la solución de una serie de conflictos por tierras, el cese de las exenciones de impuestos que benefician a maquilas y empresas

exportadoras, la nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica, incremento de salarios, vivienda digna y otras demandas. Por su lado, el Comité de Unidad Campesina y la Asamblea Social y Popular organizaron la Marcha por el Agua, planteando el problema de la utilización de recursos acuíferos por parte de empresas agroindustriales en perjuicio de las comunidades indígenas y campesinas. Estudiantes de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Bellas Artes realizaron importantes luchas contra los métodos antidemocráticos de elección de autoridades, que incluyeron la toma de los edificios que ocupan estas unidades académicas.